

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 27° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-11668-2017
CARATULADO	: ERAZO/FISCO DE CHILE

Santiago, dos de Diciembre de dos mil diecinueve

VISTOS:

En folio 1 y siguientes, y rectificación de folio 4 de la carpeta electrónica, se presenta doña **Jimena Lucía Erazo Latorre**, jubilada, domiciliada en calle Pintor Pacheco Altamirano N° 0102, comuna de La Reina, de la ciudad de Santiago, quien deduce **demanda en juicio ordinario de indemnización de daños y perjuicios**, en contra del **Fisco de Chile**, representado por doña María Eugenia Manaud Tapia, abogada, ambos domiciliados en calle Agustinas 1687, comuna de Santiago, Región Metropolitana, a objeto de que se declare que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por la prisión política y torturas a las que fue sometida, en atención a los hechos que expone y fundamentos de derecho que invoca, la suma de \$200.000.000.- (doscientos millones de pesos) a la demandante, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, o la suma que el tribunal en justicia considere adecuada, todo con costas.

En folio 11 y notificados que fuera la demandada de la acción dirigida en su contra con fecha 21 de julio de 2017, según consta en el atestado receptorial de folio 10, se presenta don Marcelo Chandía Peña, abogado, Fiscal Subrogante del Consejo de Defensa del Estado, por el **Fisco de Chile**, persona jurídica de Derecho Público, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, quien **contestando la demanda** deducida en su contra, solicita su total rechazo conforme a los fundamentos de hecho y de derecho que expone, oponiendo en, primer lugar, excepción de improcedencia de la indemnización por haber sido la demandante ya indemnizada; **en**



Foja: 1

subsidio, excepción de prescripción extintiva de la acción civil de indemnización de perjuicios con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal; y **en subsidio** de las defensas y excepciones precedentes, opone las alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y los montos pretendidos, refiriéndose a la fijación de la indemnización por daño moral y luego a la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada.

En folio 15, la demandante evacuando el trámite de la **Réplica**, reitera íntegramente lo dicho en la demanda y solicitando nuevamente sea acogida, con costas, en atención a las consideraciones de hecho y de derecho que expone respecto de cada una de las excepciones opuestas y alegaciones deducidas por la demandada.

En folio 17, la parte demandada evacúa el trámite de **Dúplica**, reiterando todas las alegaciones, excepciones y defensas planteadas por la parte en el escrito de contestación a la demanda, y con su mérito, solicita el rechazo de la acción deducida.

En folio 28, se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos y rindiéndose por las partes la prueba que obra en autos. Asimismo, consta que se agregaron los oficios en respuesta a aquellos que, a petición de parte, fueron requeridos por el tribunal.

En folio 56, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O. –

PRIMERO.- Que, en estos autos se ha presentado doña **Jimena Lucía Erazo Latorre**, ya individualizada, quien dedujo demanda en juicio ordinario de indemnización de daños y perjuicios, en contra del Fisco de Chile, representado por doña María Eugenia Manaud Tapia, ya individualizada, solicitando se declare que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por la prisión política y torturas a las que fue sometida la demandante, la suma de \$200.000.000.- (doscientos millones de pesos), o en su defecto, la suma de dinero que el tribunal considere adecuada, más los reajustes e intereses legales correspondientes desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo y total de las mismas, todo con costas.



Foja: 1

Bajo el acápite I.- **Los Hechos**, la demandante señala bajo el subtítulo I. **Primera detención**, que fue detenida el día 19 de septiembre de 1973 en su domicilio y luego conducida al subterráneo del Ministerio de Defensa, en calle Zenteno, por miembros de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), junto con su padre y uno de sus hermanos.

Agrega que durante la detención, se le acusó de poseer y esconder armas, las que supuestamente habrían sido retiradas de su domicilio con un destino desconocido. Indica que posteriormente en el interrogatorio, en el cual se procedió de manera violenta, con golpes, insultos y amenazas de fusilamiento, se le comunica que había sido denunciada por vecinos, quienes aseveraban que la habían visto sacando cajas con armas desde su vehículo, ante lo cual la demandante alegó que las cajas que habían sido retiradas de su domicilio, contenían libros y que fueron llevadas a la casa de un familiar. Momentos más tarde, luego de indicar la dirección, la condujeron en un jeep del Ejército al lugar que ella había manifestado, donde se confiscaron y retiraron las cajas con libros. Inmediatamente después de este suceso, fue devuelta a su lugar de detención, subterráneo del Ministerio de Defensa, donde los interrogatorios continuaron hasta el día siguiente.

Durante el lapso que duró la detención, expresa que fue obligada a permanecer de pie por largos períodos, mirando hacia la pared, con manos en la nuca, sin descanso ni posibilidad de dormir. Agrega que se encontraba permanentemente rodeada de efectivos de la FACH, quienes la apuntaban con sus armas.

Manifiesta que luego de tres días detenida fue dejada en libertad, faltando media hora para que se iniciara el toque de queda y que ante el temor de una nueva detención, debió partir al exilio a Quito, Ecuador.

Bajo el subtítulo II. **Segunda detención**, la demandante refiere que esta segunda detención estuvo a cargo de funcionarios de la Central Nacional de Informaciones (CNI), quienes el 15 de julio de 1980, la detuvieron en su domicilio particular y la trasladaron al Cuartel Borgoño de ese organismo. Manifiesta que cree identificar a un capitán de Ejército de apellidos Valdebenito Briones, entre sus aprehensores.



Foja: 1

Agrega que el día anterior a su detención, miembros de la CNI habían allanado su domicilio, sometiéndola en la misma ocasión a un largo interrogatorio hasta la madrugada, en su propia casa. Expresa que los agentes de la CNI la responsabilizaban por ser parte de un “Comando del MIR”, el cual había atentado contra el jefe del Servicio de Inteligencia Militar, coronel Roger Vergara, siendo acusada además de ser parte de la “Operación Retorno”, debido a que había regresado del exilio en marzo de 1980.

Manifiesta que fue detenida alrededor de las 20:00 horas y se le condujo con los ojos cubiertos con cinta adhesiva y lentes oscuros a un lugar desconocido, mientras le indicaban que la llevaban hacia la cordillera y que cruzarían durante la noche a Argentina. Posteriormente, relata que la bajaron del auto y fue conducida a un subterráneo, donde le quitaron la cinta y las gafas y procedieron a vendarle la vista, luego de lo cual fue brutalmente golpeada, insultada y sometida a simulacro de fusilamiento, en el cual la obligaban a escuchar música fúnebre mientras disparaban alrededor suyo.

También, la demandante refiere que fue obligada a permanecer desnuda y de pie durante prolongados períodos, así como también a escuchar gritos y vómitos de personas que eran sometidas a tortura a su alrededor. Agrega que se le impidió dormir y fue revisada por médicos y enfermeras, que la auscultaban y tomaban la presión arterial, mientras comentaban su buen estado de salud y sus óptimas condiciones para ser sometida a “la parrilla”, tortura para la que fue preparada en múltiples ocasiones, pero a la cual, finalmente, nunca fue sometida.

Relata que en variadas ocasiones fue obligada a beber un líquido, el cual sus torturadores indicaban que era una “droga especial” que la haría hablar. Señala nunca haberse enterado de qué era lo que bebía, ya que la mantuvieron en todo momento con la vista vendada.

Expresa que los interrogatorios a los que era sometida, se referían a su supuesta participación en la acción armada realizada en días anteriores por un comando del MIR en contra de Roger Vergara. Asimismo, indica que la mayor crueldad con el trato provino de las mujeres que integraban el grupo de la CNI, ya que actuaban con especial fuerza y brutalidad en las ocasiones que la golpeaban en el rostro.



Foja: 1

Hace presente que fue dejada en libertad y devuelta a su casa luego de dos días de detención. Sin embargo, agrega que con posterioridad sufrió un intenso amedrentamiento que se prolongó por varios meses, siendo “visitada” en su casa, en numerosas ocasiones, por los mismo captores que la habían detenido. Relata que en varias oportunidades le ofrecieron un “trato especial” si colaboraba con la CNI, tratos especiales que consistían, por ejemplo, en la devolución del pasaporte que había sido incautado durante el allanamiento. Puntualiza que dicha situación la mantuvo durante mucho tiempo deprimida y atemorizada, con temor a estar en su casa, siempre buscando la manera de pasar la noche en otros lugares, como las casas de sus amigas, donde se sentía más segura, sin embargo, le preocupaba que esto fuese interpretado como intento por esconderse y por ello, ser nuevamente detenida.

Bajo el título **Las secuelas de la detención y tortura**, tras los episodios de detención sufridos, la demandante señala que manifiesta un temor a la oscuridad; que cada vez que es atendida por una enfermera, revive los momentos de su detención por la CNI, donde por debajo de las vendas lograba distinguir los zapatos y medias blancas de las enfermeras, resultándole además, antinatural y desagradable el hecho de que le tomen la presión arterial. Indica que otro hecho que produce una evocación de recuerdos de los días que permaneció detenida, se presenta cuando sufre dolores lumbares, ya que los golpes y la obligación de permanecer de pie largos durante largo tiempo en ambas detenciones, le produjeron grandes dolores mientras estuvo detenida, ya que además sufría de escoliosis.

Agrega que su primera detención la llevó al exilio a Ecuador, lo que le impidió continuar con sus estudios en la Facultad de Bellas Artes, donde solo le faltaba un año para su titulación. Una vez en Ecuador, se vio impedida de continuar con sus estudios de Arte y comenzó sus estudios de Arquitectura, con la esperanza de llevar una mejor vida. Continúa indicando que esto no fue así, ya que, por las condiciones de su abrupta llegada al país, se vio en la situación de vivir en condiciones muy precarias e inestables, cambiando frecuentemente de domicilio.

Cuenta la demandante que decidió retornar al país durante el año 1980. Sin embargo, tras su detención ese mismo año, su pasaporte fue



Foja: 1

incautado, por lo que viajar al extranjero le causaba aprensión, no obstante que debía hacerlo para efectos de rendir su tesis en Ecuador, cuestión que solo logró hacer en 1983, lo que originó un retraso en su titulación. Relata que dicha demora en su titulación (a sus 32 años), tuvo implicancias sociales y económicas, debido a la dificultad para encontrar trabajo.

Señala que su familia vivió el hostigamiento de la CNI con mucho temor y angustia, al punto de que se fue incubando en ellos una posición distinta a la de la demandante, que deseaba permanecer en Chile. Manifiesta que sus padres la presionaban para que se fuera de Chile, y que como su deseo era permanecer en el país, se producían muchas tensiones y discusiones familiares que afectaban aún más su tranquilidad y estabilidad, impidiendo que pudiera concentrarse en los estudios de Magister que estaba cursando. Continúa indicando que gracias al apoyo psiquiátrico de la Doctora Fanny Pollarolo, quien fue su terapeuta por más de un año y el apoyo jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, en particular del abogado Roberto Garretón, pudo permanecer en el país y con el tiempo vincularse al trabajo de promoción y defensa de los Derechos Humanos, en el comité de Defensa de los Derechos del Pueblo CODEPU.

Agrega que durante 1983 obtuvo un Magíster en Desarrollo Urbano en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero que por el hecho de haberse titulado en una universidad ecuatoriana, le produjo un efecto negativo para la inserción laboral, generándole una gran frustración por el hecho de no poder ejercer la profesión de Arquitecta Urbanista, para la cual se había preparado por 10 años.

Refiere que finalmente las grandes dificultades en el área laboral, las presiones de su familia y su propia angustia por la experiencia traumática vivida en las dos oportunidades que fue víctima de prisión y tortura, hacen que la demandante decida trasladarse junto a su esposo y su hijo de un año y medio, hacia Ginebra, Suiza, el año 1987.

Bajo el acápite **II. Daño Producido**, señala que como consecuencia de las torturas infligidas se desprende, inequívocamente, un perjuicio psíquico, provocado por el Estado de Chile, durante el período del gobierno dictatorial. Agrega que los daños psíquicos de los que aún padece secuelas producto de la privación de libertad y las



Foja: 1

distintas torturas a las que fue sometida, además de ser obligada indirectamente a abandonar el país sin poder retornar por muchos años, alejándola de su familia y amigos, sin perjuicio de la pérdida de estudios y proyectos vitales.

En tal sentido refiere que, como expresó la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura *“Lo cierto es que la mayoría de las víctimas que prestaron testimonio ante esta Comisión fueron expuestas a situaciones límites que erosionaron soportes de sus vidas y dislocaron sus proyectos. Sus confesiones ilustran algunas de esas dimensiones: **Perdí a mi familia durante la prisión. Lo físico ha pasado, aunque tengo una cicatriz, pero quedó la marca para la vida [...] lo más importante es el efecto psicológico del maltrato personal y a otras víctimas, que deja una huella imborrable y difícil de describir. Es una pena y clase de dolor impregnado en el alma. Hombre detenido en 1974, a los 35 años, Región Metropolitana. Me cambiaron...nos cambiaron la vida junto a mi esposa, nos marcaron para toda la vida, nos metieron el miedo hasta los huesos...me habían...detenido..., secuestrado..., torturado..., humillado..., pateado..., golpeado..., insultado..., relegado..., pasado de hambre..., flaco..., ojeroso..., herido en el alma...Hombre, detenido en 1973, a los 24 años, Región Metropolitana. La tortura ha sido conceptualizada como una experiencia traumática que ha provocado consecuencias sistémicas. No es solamente una modalidad compleja de agresión, crueldad y denigración. Sus efectos desquiciantes se agravan precisamente por son agentes del Estado o personas a su servicio quienes dañan en nombre de la patria. Dadas estas características, se puede afirmar que las condiciones de prisión política y tortura descritas en este Informe violaron los derechos de las personas, causándoles daños emocionales, morales y materiales...**”*.

Sostiene que estos daños emocionales, morales y materiales, que necesariamente se causaron a las víctimas de prisión política y torturas, son lo que están pidiendo en esta demanda sean indemnizados. Refiere que los daños tanto físicos como psíquicos son distintos de persona en persona, sin embargo, todos tienen en común el daño moral. Puntualiza que el daño causado es obvio, público, notorio, y no hay quien pueda negarlo caprichosamente, pues se trata de dolores y traumas humanos, que no hacen distinción para alojarse en el alma de quienes los



Foja: 1

padecen, atendiendo a condiciones sociales, políticas, culturales o religiosas. Indica que la jurisprudencia ha dicho que *“el daño moral es de índole netamente subjetiva y su fundamento se encuentra en la propia naturaleza de la psicología afectiva del ser humano, de manera que puede decirse que tal daño se produce siempre que un hecho afecta la integridad física o moral de un individuo...”*.

Por su parte, agrega que la E. Corte Suprema ha expresado: *“Que, en cuanto a lo demandado a título de indemnización por daño moral debe ser legalmente acreditado, se tiene presente que en lo atinente a la prueba del daño moral la jurisprudencia reiterada de esta Corte afirma que éste es la lesión efectuada culpable o dolosamente, que acarrea molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra. Daño que sin duda no es de naturaleza propiamente económica y no implica, en consecuencia, un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa; sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva.”* (S.C.S. Rol N° 30.598-14, de 1 de diciembre de 2015, considerando 33°) El mismo fallo, señala: *“... ha de considerarse que la reparación generada por el delito, además de aparecer formulada generalmente de modo expreso, está instituida implícitamente en la institución jurídica de la responsabilidad, de modo que es precisamente en los ilícitos que emanan –entre otros- de este tipo de escenarios, de extrema convulsión social, donde el Estado debe, con justa propiedad y energía, conformar la pertinente acción reparatoria, inherente a la paz social, cual es uno de sus fines primordiales, en tanto sustento democrático de unión en la diversidad”* (Ídem, considerando 32°).

En tal sentido, sostiene que en sentencia del año 2008, por homicidio calificado de Fernando Gabriel Vergara Vargas, la E. Corte Suprema señala: *“Cabe recordar que la jurisprudencia reiterada de esta Corte afirma que el daño moral es la lesión efectuada culpable o dolosamente, que significa molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra. Daño que sin duda no es de naturaleza*



Foja: 1

propiamente económica y no implica, en consecuencia, un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa; sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva” . (S.C.S. Rol 6.308-07, de 8 de septiembre de 2008, considerando 23°)

Agrega que la E. Corte Suprema, en otro fallo, señala: “*Que atendida la naturaleza del daño moral, resulta evidente que no existe posibilidad de rendir pruebas, para apreciar su monto, ya que el dolor o sufrimiento que pueda producir determinada circunstancia, y que se radica en la intimidad de una persona, no tiene parámetros no hay forma de medirlo o cuantificarlo...*” (S.C.S. Rol 2097-2004, de 22 de diciembre de 2004)

Manifiesta que coincide plenamente con la jurisprudencia citada, agregando que el daño moral se hace patente por sí mismo en atención a los hechos, es decir, salta a la vista de lo evidente que es. En tal sentido, las angustias, padecimientos y dolores, sumados a las incertidumbres, miedo, inseguridades, son fáciles de entender en su plenitud y solo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud y del monto de la reparación.

Concluye expresando que por todos los hechos precedentemente descritos, demanda al Fisco de Chile por daño moral, como consecuencia directa del secuestro y torturas de las que fue objeto, el pago de \$200.000.00.- (doscientos millones de pesos), suma que deberá ser pagada con reajustes de acuerdo al IPC e intereses legales desde la fecha de notificación de la demanda hasta su completo pago, más las costas del juicio; o en su defecto, el monto indemnizatorio que estime el tribunal, de conformidad con su apreciación y valorización del daño.

Luego, bajo el acápite **III.- El Derecho**, señala que respecto de los hechos delictuosos narrados anteriormente, es civilmente responsable el Estado de Chile, ya que a quienes se acusa su autoría, a la fecha de su comisión, eran miembros de la Fuerza Área de Chile y de la Central Nacional de Informaciones, quienes se encontraban investidos de autoridad pública.

Indica que el Estado de Chile ha reconocido expresamente su responsabilidad en la práctica de secuestro y tortura ocurrida durante la dictadura militar, mediante distintos actos e instrumentos jurídicos,



Foja: 1

mencionando el Informe emitido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1996), el Informe sobre Prisión Política y Tortura, denominado “Informe Valech” (2004) y el Informe de la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Informe Valech 2, 2011). De este modo, manifiesta que la demandante fue reconocida como víctima de prisión política y tortura en el mencionado Informe Valech I.

En tal sentido, continúa señalando que la responsabilidad del Estado, por el daño moral ocasionado a la demandante emana en primer lugar de un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos y omisiones de sus agentes a la víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos, el que se ha desarrollado sobre la base de la jurisprudencia y de la legislación especial, y que es anterior a la fecha de comisión de los hechos juzgados en la presente causa.

En conclusión, añade que la responsabilidad del Estado emana del Derecho Administrativo, en razón del hecho propio del Estado al haber actuado como órgano cometiendo actos ilícitos que causaron daño a las personas, puntualizando que específicamente la responsabilidad del Estado emana de la Constitución Política de 1925, de la Constitución Política de 1980 y del Derecho Internacional.

Analiza luego lo que denomina bajo el subtítulo de **La responsabilidad del Estado en la Constitución Política de 1925**, indicando que la responsabilidad del Estado, consagrada en las Actas Constitucionales números 2 y 3, y la actual Constitución de 1980, reconoce claros antecedentes en la Constitución Política de 1925, vigente a la época de los actos ilícitos descritos.

Hace referencia a que la doctrina iuspublicista ha sostenido que existe un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causado por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos. En tal sentido, agrega, que el profesor Eduardo Soto Kloss enseña que dicho principio general de responsabilidad del Estado emana de que el Estado Chileno es una República, lo que implica que todos los sujetos



Foja: 1

tanto públicos como privados deben responder de sus actos y omisiones por encontrarse insertos en un Estado de Derecho, lo que tiene como consecuencia directa que cualquier sujeto que se sienta agraviado o lesionado por actos de los órganos públicos puede demandar a los tribunales de justicia el resarcimiento de los perjuicios conforme al estado democrático. En tal sentido, lo dicho por la doctrina se fundamenta en el principio de igualdad que ya plasmaba el artículo 10 N° 1 de la Constitución de 1925, pues es inconstitucional que un sujeto de derecho sea lesionado y perjudicado sin ser indemnizado en relación a otros sujetos a los cuales no les afectan los actos u omisiones ilícitos del órgano estatal. La consagración del gobierno republicano y democrático se plasma de manera explícita en el artículo 1° de la Constitución de 1925 que señala: *“El Estado de Chile es unitario. Su gobierno es republicano y democrático representativo”*.

Manifiesta que los otros preceptos que sustentan el principio general de responsabilidad del Estado, a la luz de la Constitución de 1925 son los artículos 4, 10 N° 1 y 10 N° 9. Concluye, que el artículo 4 precitado, fuente directa de los actuales artículos 6 y 7 de la Constitución de 1980, establecía la obligatoriedad de los órganos del Estado de ceñirse a las prerrogativas y facultades que les entregaba la ley y los actos que excedieren a sus atribuciones adolecían de nulidad. Puntualiza que si bien no se agregaba que dichos actos nulos originaban las responsabilidades que la ley señale, no puede entenderse de otra forma, pues sabido es que la nulidad de los actos conlleva siempre y en todo caso la indemnización de los perjuicios causados a resultas de la nulidad. Continúa analizando lo preceptuado por el artículo 6 de la Constitución de 1980 que, como señaló, posee su fuente en el artículo 4 ya citado, expresando que existe mediana claridad de que los órganos del Estado siempre deben sujetar su actuar a la preceptiva constitucional y a la leyes, pues si fuera otra la interpretación no se entendería el principio de supremacía constitucional. Por otra parte, aclara, el principio de sujeción a la Constitución se plasma en el artículo 2 de la Constitución de 1925 que dispone: *“La soberanía reside esencialmente en la nación, la cual delega su ejercicio en las autoridades que esta Constitución establece”*.

Concluye exponiendo que rige un principio general de responsabilidad por sus actos y omisiones, basado en los artículos 1, 2,



Foja: 1

4 de la Constitución de 1925, principio que se concreta en el artículo 10 N° 10 y N° 9 de la misma Constitución, que consagran respectivamente, el derecho de propiedad, sin distinción alguna y la igual repartición de las cargas públicas.

Con relación al artículo 10 N° 10 de la Constitución de 1925, se analiza en el sentido que todo daño fruto del actuar de algún órgano del Estado, como lo es la Fuerza Aérea de Chile, constituye un desmejoramiento de la esfera patrimonial de los sujetos afectos y genera, como es obvio, el derecho a exigir la responsabilidad del Estado, pues nos encontramos ante una lesión de derecho de propiedad, ya que fue privado de bienes que forma parte de su esfera de la personalidad y, según prescribe la citada norma constitucional, *“nadie puede ser privado de la de su dominio, ni de una parte de ella, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial o de expropiación por razón de utilidad pública, calificada por una ley”* En tal sentido, indica que ninguna de las hipótesis descritas se verificó y, sin embargo, de igual manera se le privó de bienes personalísimos al atentar contra la esfera subjetiva e infligirle el daño moral indicado.

Con respecto al artículo 10 N° 9 de la Constitución de 1925, fuente directa del artículo 19 N° 20 de la Constitución de 1980, que aseguraba el principio de la igual repartición de las cargas públicas, el que obliga a indemnizar a todo aquel que infringe un daño, producido antijurídicamente, implica una ruptura de la igual repartición de las cargas públicas, derecho que la Constitución aseguraba y amparaba frente a sus violaciones, y en especial a aquellas cometidas por los órganos públicos. Sostiene que dicho detrimento en la esfera de los afectos que ha sufrido infringió la igual repartición de las cargas públicas al exponer a la persona, a diferencia de otras muchas, a sufrimientos inhumanos. Por lo tanto, concluye que la actuación de la Fuerza Aérea de Chile y de la Central Nacional de Informaciones, órganos del Estado, constituye un desigual tratamiento que infringe el artículo 10 N° 1 y N° 10 de la Constitución de 1925.

Bajo el subtítulo **Responsabilidad en el Derecho Administrativo Actual**, revisa la responsabilidad del Estado en el marco de la legislación actualmente vigente, atendido el principio de vigencia in actum de las normas ius publicistas del Derecho Administrativo. En ese sentido, indica que el art. 38 inciso 2° de la



Foja: 1

Constitución Política de la República se establece un mecanismo de reparación de los daños producidos por la Administración a los particulares, sistema que se caracteriza por ser de carácter directo, es decir, la acción de reparación del particular afectado se hace efectiva en el patrimonio Fiscal cuando los organismos, como en el caso de autos, actúan bajo la personalidad jurídica del Estado.

Hace referencia a lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado N° 18.575, el cual prescribe que el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiera ocasionado, e indica lo consagrado por el artículo 44 de la precitada ley que señala que los órganos de la Administración serán responsables del daño que causen por falta de servicio.

Expresa que la obligación de indemnizar debe considerarse a la luz del derecho constitucional, en especial consideración del Bloque de Constitucionalidad, que integra el art. 5° CPE y las normas de derecho internacional de origen consuetudinario o contractual, vigentes en Chile, precisando en palabras del profesor Humberto Noguera que *“por bloque constitucional de derechos fundamentales entendemos el conjuntos de derechos de la persona (atributos) asegurados por fuente constitucional o por fuentes del derecho internacional de los derechos humanos (tanto el derecho convencional como el derecho consuetudinario y los principios de ius cogens) y los derechos implícitos, expresamente incorporados a nuestro ordenamiento jurídico por vía del artículo 29 literal c) de la CADH, todos los cuales, en el ordenamiento constitucional chileno, constituyen límites a la soberanía, como lo especifica categóricamente el artículo 5° inciso segundo de la Constitución Chilena vigente”* (Humberto Noguera Alcalá, Informe en derecho sobre precedentes jurisdiccionales en materia de media prescripción, Revista Ius et Praxis – año 14 – n° 2.589 p. 568)

Continúa bajo el subtítulo que denomina **Imprescriptibilidad de la acción**, agregando que la acción de derecho público para exigir la responsabilidad del Estado por actos u omisiones por las cuales se ha producido daño a personas que no se encuentran sujetas a sufrir el gravamen de soportarlos por atentar a la igual repartición de las cargas



Foja: 1

públicas, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, según la doctrina unánime de los autores iuspublicistas, es imprescriptible. En ese sentido, la responsabilidad del Estado es un problema de derecho público y al cual cabe aplicar reglas de derecho público y no las normas del Título XXXV del Código Civil. Cita al profesor Eduardo Soto Kloss, quien ha expresado que *“...la aplicación de fórmulas privatistas a la relación entre Estado (Administración) y agravio particular (natural o jurídico), que nace del daño cometido por aquel, no es una relación de derecho privado – que son reguladas por el Código Civil- sino una relación jurídica pública, que obedece a otros principios (que son de derecho público) y, en consecuencia, necesita de otras soluciones para encontrar lo justo concreto que resuelva el conflicto originado por dicho daño.”* (Eduardo Soto Kloss, Derecho Administrativo, volumen II, Bases Fundamentales, p. 284).

Menciona además jurisprudencia de tribunales superiores, los cuales también han recogido la inaplicabilidad de las reglas del Título XXXV del Libro IV del Código Civil, y por ende, de las reglas en materias de prescripción, indicando en particular la causa ingreso N° 24.288-2016, en cuya sentencia de fecha 5 de septiembre de 2016 la Corte Suprema declaró que *“pretender aplicar las normas del Código Civil a la responsabilidad derivada de crímenes como los de la especie, posibles de cometer con la activa colaboración del Estado, (...) resulta improcedente”*. Añade otro fallo, causa rol 3058-2014, referido específicamente respecto al ilícito de torturas y la responsabilidad civil del estado, en el cual se falla lo siguiente: *“Que, tratándose de delitos como los investigados, que la comunidad internacional ha calificado como de lesa humanidad, la acción civil deducida en contra del Fisco tiene por objeto obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por el actuar de un agente del Estado, conforme fluye de los tratados internacionales ratificados por Chile y de la interpretación de las normas de derecho interno en conformidad a la Constitución Política de la República.”*

Concluye expresando que las normas en materia de prescripción que contempla el Código Civil para los delitos y cuasidelitos, no resulta aplicable a los procesos en que se persiga la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que en este caso también existen las normas de derecho público que rigen la responsabilidad del Estado,



Foja: 1

como son los preceptos citados de la Constitución de 1925, por lo que la acción que se ejerce en estos autos es imprescriptible.

En lo que subtitula **Forma de operar de las disposiciones constitucionales**, manifiesta que aquellas que consagran la responsabilidad del Estado por los daños cometidos en cualquiera de sus actividades tienen una vinculación directa sin ser necesaria la dictación de una norma de inferior rango que disponga su aplicación, es decir, poseen operatividad propia y, obviamente, desde el momento que asumen su carácter de normas constitucionales priman por sobre toda otra disposición.

Por su parte, en el título que refiere a **Recepción de esta doctrina por parte de nuestra jurisprudencia**, se menciona que la citada responsabilidad del Estado, fundada en una primera etapa sobre la legislación civil, evolucionó para fundarse en principios de derecho público. Puntualiza que la doctrina cita como los primeros fallos en que se sustenta la responsabilidad en principios de derecho público a “Sociedad Fuschs y Plath con Fisco” sentencia de 11 de enero de 1908 y “Lapostol con Fisco” sentencia de 8 de enero de 1930. Sin embargo, acota que es en la sentencia dictada en “Haxagon con Fisco”, de 28 de julio de 1987, en que se declaran inaplicables las disposiciones del Código Civil para decidir la demanda dirigida contra el Fisco, resolviendo el caso sobre la base de las normas constitucionales y legales diversas al Código Civil.

Prosigue la demandante expresando que la circunstancia que se desea destacar es que la jurisprudencia, sobre la base de la legislación especial, ha sustentado la responsabilidad de la Administración, cuya normativa especial arranca de los artículos 2° , 4° , 5° , 6° , 7° , 38° de la Constitución Política y 4° y 42° de la Ley 18.575. Precisa que la norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley 18.575 no afecta la disposición del artículo 4° , por lo que debe atenderse a la concepción de la Administración del Estado que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública.



Foja: 1

En tal sentido, señala que la doctrina de la responsabilidad del Estado emanada del Derecho Público ha sido recogida íntegramente en el histórico fallo dictado en el caso del homicidio de los profesionales Guerrero, Nattino y Parada, el que se encuentra ejecutoriado y en el que textualmente se señaló *“Que el artículo 38 inciso segundo de la Constitución, establece la posibilidad para cualquiera persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, reclame de ello ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiere causado el daño. Esta última norma, establece una acción de carácter constitucional, para reclamar ante los tribunales de justicia, cualquier lesión que sufra una persona en sus derechos por la Administración del Estado, acción establecida en términos amplios, para que se pueda activar la actividad jurisdiccional y obtener la reparación de los daños causados”*.

Analiza dicha sentencia, expresando que dicha jurisprudencia tiene su antecedente en la importante sentencia dictada por la Corte Suprema conociendo de un recurso de Casación en el Fondo interpuesto por el fisco en el citado caso *“Hexagón Limitada con Fisco”*, en la cual se contiene el siguiente razonamiento: *“...En consecuencia, un daño que se produzca por los órganos del Estado y que no esté amparado por las normas constitucionales genera responsabilidad conforme lo señalado en los artículos 3 y 7 del Acta Constitucional N° 2”*. En conclusión, manifiesta que todo daño que produzca un órgano del Estado, implica según se ha dicho un menoscabo o lesión en lo suyo para la persona que lo sufre, se ve afectada por una carga que solo ella soporta, generando una desigualdad en la repartición que vulnera la norma constitucional debiendo ser resarcida por el Estado.

Bajo el subtítulo **Otras disposiciones que obligan a indemnizar**, la demandante expone que sin perjuicio de la obligación del Estado de indemnizar los daños causados por sus órganos en el ejercicio de sus funciones en virtud de las disposiciones antedichas, su responsabilidad extracontractual también emana de la acción de indemnización contemplada en los artículos 4 y 44 de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado que consagran la responsabilidad del Estado por falta de Servicio, normas en la que se hace responsable al Estado por los daños que causen los órganos de la



Foja: 1

Administración, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado.

Prosigue la demandante, quien bajo el subtítulo **Concurrencia de los requisitos para indemnizar en el caso de autos**, enumera todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados: 1. En cuanto al daño moral, indica que por el solo hecho de haberse producido un delito éste se presume. 2. La acción u omisión emanó de órganos del Estado, ya que fueron agentes del Estado quienes torturaron a la demandante, sin que haya demostrado la sujeción a procedimiento alguno. Agrega que el hecho que causó daño fue ejecutado por el Estado de Chile, puesto que fueron órganos de su administración los que actuaron y debe entenderse que ha actuado el Estado como tal. 3. Nexos causal. El daño a la víctima emana, justamente, de la perpetración del delito civil. 4. Por último, indica que no existen causales de justificación que eximan al Estado de su responsabilidad en este caso.

En seguida, en el apartado titulado **Fundamentos del Derecho Internacional que obligan al Estado a indemnizar**, precisa que de acuerdo a los hechos narrados precedentemente y que afectaron a la demandante, los agentes del Estado incurrieron en una falta personal, al privar de forma ilegítima de la libertad y someter a torturas a la demandante. En esta perspectiva, prosigue, el Estado no puede desvincularse de la falta en que incurrieron sus agentes, ya que fue el propio Estado el que les asignó la función pública de “reunir información estratégica para la seguridad nacional”, la que ejercieron abusivamente cometiendo falta personal en su ejercicio, comprometiendo con ellos la responsabilidad del Estado.

Profundiza en dicho sentido, señalando que los hechos generadores de la responsabilidad que se demanda, tienen además el carácter de violación a los derechos humanos, delito de lesa humanidad y crimen de guerra, debiendo determinarse la responsabilidad del Estado en conformidad con los convenios o tratados internacionales, las reglas de derecho internacional que se consideran ius cogens y el derecho consuetudinario internacional, sin perjuicio de encontrarse también estipuladas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, cuyo artículo 27 dispone que “el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir obligaciones internacionales” y que de



Foja: 1

hacerlo comete un hecho ilícito que compromete su responsabilidad internacional (Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000, Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas” , página 231).

En efecto, manifiesta que acorde a dicho precepto, la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícito queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar disposiciones de derecho interno. Hace presente el carácter consuetudinario de estas normas, y expresa que atendida su naturaleza no son creadas, sino simplemente reconocidas por los Estados, de lo que deriva su ineludible aplicación, de manera tal que produciéndose un hecho ilícito imputable a un Estado la responsabilidad de éste surge de inmediato por la violación de la norma de Derecho Internacional, con el consiguiente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias indeseadas.

A mayor abundamiento, añade que el artículo 131 de la Convención de Ginebra pretender hacer efectiva la responsabilidad que resulta de esta clase de hechos y no se limita a la de carácter penal, de la misma manera que lo hace el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. De ese modo, sostiene, el derecho a la reparación es un derecho fundamental, esto es, uno de aquellos que los Estados declaran para asegurar y hacer posible la convivencia democrática, el que por su naturaleza es imprescriptible.

Por último, en el título que denomina **Procedencia de la indemnización del daño moral**, acota que la responsabilidad del Estado es integral, es decir, debe repararse y todo daño causado a un particular y, para un correcta interpretación de estas disposiciones que dejan un claro vacío las normas de derecho administrativo indicadas, es necesario acudir al derecho común.

Apunta que la indemnización, según el artículo 2329 del Código Civil, comprende todo daño, por lo que naturalmente está incluido el daño moral. La procedencia de la reparación al daño moral, agrega, está reconocida en forma unánime por la doctrina y jurisprudencia nacional.

Finaliza expresando que de lo ya señalado, el Estado de Chile debe responder por el perjuicio que han ocasionado funcionarios de la



Foja: 1

Fuerza Aérea de Chile y la Central Nacional de Inteligencia actuando en calidad de tales, puesto que se dan todos los supuestos necesarios para determinar el perjuicio moral sufrido por la demandante, solicitando que se acoja a tramitación la demanda, y se acepte en todas sus partes declarando que el demandado debe pagar, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por la prisión política y torturas a las que fue sometida la demandante, la suma de \$200.000.000.- (doscientos millones de pesos), más reajustes e intereses, o en su defecto, la suma que el tribunal estime ajustada a derecho, equidad y mérito de autos, todo con costas.

SEGUNDO.- Que, contestando la demanda el Fisco de Chile, solicita el rechazo de dicha acción en base a las excepciones, defensas y alegaciones que expone.

En primer lugar, en el acápite denominado **I. De la demanda**, repasa la misma señalando que comparece la actora e interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, condenando sea obligado a pagarle la suma total de \$200.000.000.-, más reajustes, intereses y costas, contados desde la fecha de notificación de la demanda, como reparación por el daño moral sufrido con motivo de los apremios ilegítimos, prisión ilegal y torturas que sufrió, hechos cometidos por agentes del Estado y acaecidos, la primera detención el 19 de Noviembre de 1973, y la segunda detención y apremios, el 15 de julio de 1980., invocando como fundamento jurídico los artículos 5° , 6° , 7° y 38° inciso segundo de la Constitución Política de 1980; los artículos 4° y 44° de la Ley 18.575; y el complejo normativo de tratados internacionales sobre Derechos Humanos, citando entre otros, la Convención de Ginebra y los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como “El Pacto de San José de Costa Rica” .

Luego, en el acápite denominado **II. Excepciones y Alegaciones Fiscales**, en su numeral **II.1)** opone la **Excepción de reparación integral. Improcedencia de la indemnización por haber sido ya indemnizada la demandante**, señalando en lo que subtitula como **II.1.1) Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas**, que la indemnización solicitada se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transaccional, tanto en el Derecho Interno, como en el



Foja: 1

Internacional. En dicho ámbito se ha de atender, tanto a la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado para que estos no se repitan en el futuro, como a la necesidad de decidir qué proporción de los recursos económicos públicos deberá ser destinada a reparar a las víctimas. Describe que las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos, siendo este concurso de intereses o medida de síntesis, exhibido normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

En tal sentido, hace mención a las discusiones originadas en la aprobación de la Ley N° 19.123, con relación al cúmulo de sensibilidades e intereses en juego, expresando que no debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

En el numeral II.1.2) **La complejidad reparatoria**, expresa que dentro de los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Aylwin, estaba la provisión de reparaciones para los afectados, respecto del cual la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su informe final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre la cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas y algunas prestaciones de salud”, sirviendo dicho informe de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y reconciliación. Acota que el mensaje de dicho proyecto fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas” .



Foja: 1

Con respecto a la forma en que se entendió la idea de reparación, indica que el Ejecutivo, siguiendo el referido informe de la Comisión, entendió por reparación *“un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho informe”* .

Reitera que asumida la idea reparatoria, la Ley N° 19.123 y, sin duda, las demás normas conexas (como la Ley N° 19.992, referida a las víctimas de torturas), han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, indicando los siguientes: a) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, reparaciones simbólicas. Como lo refiere la demandada, por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto del proceso de justicia transicional, y que en lo que a este acápite respecta, se busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Procede a analizar cada una de las compensaciones, con el objeto de verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

En primer lugar, bajo el título **II.1.3) Reparación mediante transferencias directas de dinero**, indican que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Sostiene a este respecto, que desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que se pueda valorizar para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

En segundo lugar, bajo el título **II.1.4) Reparaciones específicas**, la demandada manifiesta que la actora ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N° 19.234 y N° 19.992 y sus modificaciones. Esta última normativa, indica, estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas reconocidas como víctimas. Señala que conforme se acreditará en la etapa procesal pertinente, la



Foja: 1

demandante ha recibido, hasta la fecha, los beneficios y montos contemplados en las leyes de reparación mencionadas.

En tercer lugar, en el apartado que titula **II.1.5) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas**, manifiesta que tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza solo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En ese sentido, puntualiza que se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley N° 19.234 como de la Ley N° 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Agrega que igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. Del mismo modo, menciona que se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

Por último, en el apartado titulado **II.1.6) Reparaciones simbólicas**, hace referencia a los actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones, como parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de D.D.H.H. Precisa que este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor, sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ellos reducir el daño moral. Destaca en ese sentido, la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago; b) el establecimiento mediante Decreto N° 21 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de Octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido (30 de agosto de cada año), c) la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; d) el establecimiento mediante Ley N° 20.405 del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) la construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las infracciones a los D.D.H.H. tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otros.



Foja: 1

Luego, bajo el título II.1.7) **La Identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas**, expresa que de todo lo expresado, puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de D.D.H.H. han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional y han provisto indemnizaciones acordes con la realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los D.D.H.H.

Agrega que tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos, así como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esa manera, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado aquellos daños, no procediendo, ser compensados nuevamente.

Hace referencia en este punto al fallo *Domic Bezic, Maja y otros con Fisco*, indicando que ha sido especialmente gráfico cuando afirma que una pretensión indemnizatoria es incompatible con los beneficios legales entregados por la Ley 19.123 pues *“aquellos beneficios legales tienen el mismo fundamento y análoga finalidad reparatoria del daño moral cuyo resarcimiento pretende la acción intentada en este juicio y ellos son financiados con recursos fiscales, conforme se desprende de lo establecido en el Título VI de ese texto legal”*. Puntualiza que lo anterior ha sido ratificado por la Excma. Corte Suprema que, en sentencia de casación de fecha 30 de enero de 2014, reiteró la incompatibilidad de la acción pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos, resolviendo que: *“DÉCIMO NOVENO: Que en cuanto a la actora Flor Rivera Orellana, ella ha percibido los beneficios de la Ley N° 19.123, de forma que no puede pretender una indemnización a un daño del que ya ha sido reparada. (...) En estas condiciones no es dable estimar que el goce de la pensión de reparación de la Ley N° 19.123 pueda ser compatible con otras indemnizaciones al mismo daño moral que la ley trató de resarcir con su otorgamiento, más aún cuando dicha pensión es renunciable con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, situación que no corresponde a la de la demandante, quien –como se dijo– percibe las pensiones a que se ha hecho referencia”*.



Foja: 1

Agrega que, en el mismo sentido, diversas sentencias ya habían insistido que en que el propósito de estas leyes fue precisamente *“reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”* (Espinoza Figueroa y Ríosco Espinoza con Fisco de Chile, Rol 1963-2005), lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la improcedencia de la indemnización.

Concluye que estando la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismo daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, al tenor de documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la demandante de la presente causa.

En el numeral II.2) **Excepción de prescripción extintiva**, señalando bajo el subtítulo II.2.1) **Normas de prescripción aplicables**, que la demandada además opone excepción de prescripción extintiva de la acción deducida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Expresa que es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 21 de julio de 2017, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil.

En subsidio, en caso de estimar el tribunal que la norma anterior no es aplicable al caso, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho indemnización y la anotada fecha de notificación de las acciones civiles que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.



Foja: 1

Bajo el título **II.2.2) Generalidades sobre la prescripción**, manifiesta que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Argumenta que pretender que la responsabilidad el Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que *“para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”* (I. Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de 8 de abril de 1982. Revista de Derecho y Jurisprudencia. Tomo LXXX, Sec. 2^a, p. 38, citada por Domínguez Águila, Ramón, *La prescripción extintiva*. Editorial Jurídica de Chile. 1^a Ed. 2004, p. 148, Nota 411).

Bajo el título **II.2.3) Fundamento de la prescripción**, expresa que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Destaca que la prescripción es, por sobre todas las cosas, una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Afirma que está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Agrega que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización, y que solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción, indicando que en la especie, el ejercicio de la acción ha sido posible durante un número significativo de años, desde que la demandante estuvo en situación de hacerlo.

Analiza luego, en el apartado **II.2.4) Jurisprudencia sobre la prescripción**, en primer lugar, la sentencia de pleno de la Excm. Corte Suprema de fecha 21 de enero de 2013. Señala que, en uso de



Foja: 1

la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Indica que, el máximo Tribunal pleno zanjó la controversia señalando: 1) “Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva” .

Transcribe luego el considerando octavo, para agregar 2) “Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal” .

A continuación, reproduce los considerandos cuarto, quinto, sexto y séptimo, siguiendo con el numeral 3) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazos de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular, por el artículo 2.332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto. Transcribe al efecto el considerando décimo.

Continúa luego con el numeral 4) Que, no obstante, la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino que desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Finaliza manifestando que las sentencias anteriores y posteriores al citado fallo no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia, acogiendo las argumentaciones



Foja: 1

hechas valer por esta defensa, lo que solicita tener especialmente en consideración al momento de resolver la presente Litis.

Bajo el subtítulo **II.2.5) Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria**, argumenta que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para obligar al pago y su contenido es netamente patrimonial. Expresa sobre el particular que, como lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece al ámbito patrimonial.

Continúa remitiéndose a lo que denomina **II.2.6) Normas contenidas en el Derecho Internacional**, expresando que se hará cargo de ciertos instrumentos internacionales indicando que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

- La Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra” y b) “a los crímenes de lesa humanidad” ; pero como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema, en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

- Los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal, que no cabe extender imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

- La Resolución N° 3.074 de 03 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de



Foja: 1

Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal, que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

- La Convención Americana de Derechos Humanos, expresando que, sin perjuicio que la aplicación de dicho Tratado no es atinente al caso sub lite puesto que, en la época en que acontecieron los hechos, no estaba vigente, dado que su promulgación se produjo por Decreto Supremo N° 873, publicado en el Diario Oficial el 05 de Enero de 1991, la citada normativa no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria.

Añade que al efectuar la ratificación conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o en todo caso, a hechos a cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. Se remite luego al artículo 63 en que faculta exclusivamente a dicha Corte para imponer condenas de reparación de daños y no impide la aplicación del derecho interno nacional ni la institución de la prescripción en Chile. Concluye que el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Indica que la Excma. Corte Suprema ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos citando al efecto Ingreso 1.133-06, caratulados Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile de 24 de Julio de 2007, cuya sentencia reproduce parcialmente, como, asimismo, causa Ingreso 4.067-2006.

Concluye, que no habiendo en consecuencia norma expresa de derecho internacional de Derechos Humanos debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar y no pudiendo tampoco aplicarse por



Foja: 1

análoga la imprescriptibilidad penal en materia civil, el tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver la contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En el apartado II.3) denominado **En cuanto al daño e Indemnización Reclamada**, expresa que, **en subsidio**, de las defensas y excepciones precedentemente opuestas, opone las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y los montos pretendidos.

Se refiere al efecto, en primer lugar, a lo que denomina **II.3.1) Fijación de la indemnización por daño moral**, recordando que el daño moral consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general en sus atributos o cualidades morales. Así, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos, no directamente.

Afirma que ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

Señala que, en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Agrega que, tratándose del daño puramente moral, por afectar a bienes extrapatrimoniales o inmateriales, no apreciables en dinero, la indemnización no hace desaparecer el daño, ni tampoco lo compensa en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquel. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida permanece, cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba.

Continúa indicando que, por ende, la indemnización puramente moral no se determina cuantificando en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero



Foja: 1

u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Añade que hay que asumir la premisa de que nunca puede ser una fuente de lucro o ganancia, sino que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida. Sostiene que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, el juez solo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades.

Precisa que no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica del tercero civilmente en un hecho delictual o cuasidelictual, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago.

Concluye que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta absolutamente excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los tribunales de justicia, que en esa materia han actuado con mucha prudencia.

Hace presente, con el punto II.3.2) **En subsidio de las excepciones precedentes de reparación y prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales**, que en efecto, en subsidio de las excepciones anteriormente opuestas, se alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos, el tribunal debe considerar todos los pagos recibidos por la actora a través de los años por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.234, 19.992, su modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

Manifiesta que de no accederse a esta petición subsidiaria, implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los



Foja: 1

principios básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Por último, agrega que es pertinente hacer presente que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Se refiere luego, con el punto **II.4) Improcedencia del pago de reajustes e intereses**, haciendo presente que los reajustes solo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además que la sentencia este firme o ejecutoriada. Señala que a la fecha de la notificación de la demanda y mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representada de indemnizar y por tanto, no existe ninguna suma que deba reajustarse.

Añade que, el reajuste es un mecanismo económico financiero que tiene por objeto neutralizar el proceso de los procesos inflacionarios o deflacionarios que tienen sobre la moneda de curso legal, por lo que resulta absurdo pretender aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha que precede a la determinación del monto por sentencia ejecutoriada.

En relación a los intereses señala que el artículo 1.551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia. Señala que así lo ha decidido de manera uniforme nuestros tribunales superiores de justicia.

Finaliza señalando que en el hipotético caso que se condene a su representada al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses solo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representada incurra en mora.

Concluye solicitando tener por contestada la demanda civil deducida en autos, y en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.



Foja: 1

TERCERO.- Que, la parte demandante, al evacuar el trámite de la **réplica**, reitera íntegramente lo dicho en la demanda y solicita que sea acogida con costas.

En primer lugar, bajo el título **2. Respecto a la excepción de reparación integral**, sostiene que el hecho de haber obtenido pensiones de reparación con arreglo a la Ley N° 19.123 por parte de algunos familiares, no es óbice para que se indemnice mediante un monto fijado por un tercero imparcial, que es un Tribunal de la República.

Argumenta que la pretensión del Fisco de Chile, de oponer excepción de pago, resulta inconciliable con la normativa internacional ya señalada en la demanda, porque el derecho común interno solo es aplicable cuando no lo contradice el Derecho Internacional.

Agrega que la preceptiva invocada por el Fisco –que solo consagra un régimen de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es dable presumir que se diseñó para cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos porque se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación citada, no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley.

En segundo lugar, en el apartado titulado **3. Respecto a la excepción de prescripción**, expresa que reiterada jurisprudencia de la E. Corte Suprema ha señalado que tratándose de un delito de lesa humanidad –lo que ha sido declarado en la especie- cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas



Foja: 1

calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, comprendidos en los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Señala en este sentido, la jurisprudencia de la Corte Suprema contenida en Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2105; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras. En ese sentido, continúa, cualquier pretendida diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.

Enfatiza que todo lo señalado, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5° , inciso segundo, y 6° de la Constitución Política de la República.

Concluye manifestando que no resultan aplicables a estos efectos las reglas del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios.

En tercer lugar, bajo el título **3. En cuanto al monto de la indemnización**, considera que los montos demandados se encuentran totalmente ajustados a la justicia, ya que se trata del daño moral de la mayor entidad e indica que se demostrará oportunamente en el término probatorio, acreditando las consecuencias dañosas de los aciagos hechos narrados para la salud mental de la demandante.

Por último, en el apartado titulado **4. Reajuste e intereses**, indica que a este respecto, éstos están demandados conforme a derecho, puesto que un tribunal fija los montos en un momento determinado, pensado en el valor adquisitivo de esa fecha, razón por la cual tiene que considerar la desvalorización. En todo caso, señala, es una discusión que carece de sentido, por cuanto los tribunales del fondo serán los soberanos para fijar el momento desde el cual comienza, se reajustan y devengan intereses los montos fijados como indemnización.



Foja: 1

CUARTO.- Que, la demandada evacuando el trámite de **dúplica**, reitera todas las alegaciones, excepciones y defensas planteadas en el escrito de contestación a la demanda y con el mérito de ellas solicita el rechazo de la acción deducida.

En primer lugar, bajo el título **1. Improcedencia de la demanda: Ley N° 19.123**, argumenta que el Estado de Chile adoptó una política integral de reparación tanto en dinero, beneficios de salud, construcción de memoriales, etc, y por eso es integral y no solo una denominación, como alega la demandante en su réplica.

Indica que la pensión de reparación conforme a la Ley 19.123, tuvo un claro fin reparatorio del daño moral, nunca tuvo el carácter de “pensión de sobrevivencia”, como la han llamado, como aquellas que se otorgan a quienes no han podido obtener una pensión con sus fondos.

Reitera a este respecto el fallo pronunciado por la Corte Suprema en los autos caratulados “Domic Bezic Maja y otros con Fisco”, que sentenció “que el goce de la pensión de reparación y otros beneficios establecidos en sus normas, no puede ser conciliable con el pago por parte de Fisco de una indemnización por el mismo concepto, si se recuerda que “indemnizar” importa resarcir de un daño o perjuicio o agravio, de acuerdo con el sentido natural y obvio de esos términos” .

Transcribe luego los considerandos décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo, del citado fallo, concluyendo que, todo ello determina que respecto de la demandante, y probada que sea la percepción de dichos beneficios, se configure la excepción de pago que opone, ya que las indemnizaciones demandadas en estos autos son improcedentes, por ser incompatibles con los referidos beneficios otorgados por el Estado.

Prosigue con el apartado titulado **2.- La excepción de prescripción invocada por esta defensa**, en el cual a diferencia de lo sostenido por la demandante en su réplica, sostiene que reiterada e invariable jurisprudencia mayoritaria de la Excelentísima Corte Suprema que aplica el artículo 2332 del Código Civil a la acción por responsabilidad extracontractual del Estado, volviendo a reiterar las sentencias que se invocaron en el escrito de contestación de la demanda, concluyendo que la afirmación que la contraria estampa en su demanda no ha sido una cuestión pacífica, ya que a diferencia de lo



Foja: 1

sostenido en la réplica, también existe una nutrida jurisprudencia que reconoció el carácter prescriptible a la acción deducida en autos.

QUINTO.- Que, recibida la causa a prueba, consta en autos que el demandante acompañó por presentación de folio 36 y folio 38, documentos, guardados en custodia del tribunal bajo números 7031-2018 y 7032-2018, a saber:

1.- Copia autorizada de Certificado Médico de fecha 09 de octubre de 2017, evacuado por la Médico Psiquiatra Dra. Fanny Pollarolo Villa, en el que la profesional señala haber atendido clínicamente a la Sra. Jimena Erazo Latorre, en FASIC, durante los años 1980 y 1981, por un periodo alrededor de un año, tratándose de una intervención psicoterapéutica ambulatoria brindada en su calidad de integrante y directora del “Programa médico-psiquiátrico para víctimas de la represión política. Consigna que la paciente consultó por un estado de ansiedad extrema y creciente que le estaba impidiendo rehacer una vida normal luego de la detención y tortura sufrida. Consigna que el diagnóstico configuraba un síndrome post- traumático, con grave sintomatología depresivo ansiosa que requería terapia biológica, junto a una intervención psicoterapéutica prolongada, y asimismo, refiere haber sido un largo y difícil esfuerzo requerido para que Jimena superara el profundo daño emocional que había provocado la tortura en ella y en su vida.

2.- Copia autorizada de Ficha de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura de doña Jimena Erazo Latorre, emanado del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

3.- Copia simple de Informe Confidencial de Vicaría de la Solidaridad de julio de 1980.

4.- Copia simple de Informe Confidencial de Vicaría de la Solidaridad de agosto de 1980.

5.- Copia simple de denuncia ante Fiscalía Militar por detención en lugar no destinado al efecto, interpuesta por doña Lucía Latorre Salinas, por su hija Jimena Erazo Latorre, Rol 51-80.

6.- Copia autorizada de Certificado de título de arquitecta de doña Jimena Lucía Erazo Latorre, de la República de Ecuador.



Foja: 1

7.- Copia simple de Listado de Víctimas reconocidas por la Comisión de Prisión Política y Tortura, en la página que aparece la demandante.

8.- Certificado emanado de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas de fecha 28 de septiembre de 2017, en el que don Claudio González, Secretario Ejecutivo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, certifica que doña Jimena Erazo Latorre, fue atendida en el Programa de Salud Mental de la Institución en los años 1980 y 1981, quien solicitó atención psiquiátrica con posterioridad a su detención por personal de la Central Nacional de Informaciones CNI, ocurrida en el mes de julio de 1980.

SEXTO.- Que, asimismo, la parte demandante hizo concurrir a estrados a los siguientes **testigos**, cuyas actas rolan a fojas 49 y 50, quienes debidamente juramentados y legalmente examinados deponen al tenor de la interlocutoria de prueba de fojas 28, exponiendo en primer lugar, doña **Faviola Alicia Letelier del Solar**, que conoce muy bien a la demandante Jimena Erazo, sabe que es arquitecto y que en su familia hay algunos acercamientos a la suya por parentesco político, que le ha permitido apreciar sus condiciones personales. Señala que sabe que Jimena Erazo figura en la lista de personas torturadas calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura conocida como Comisión Valech, que lo sabe porque es abogada y en su conocimiento del derecho ha podido apreciar la calidad de vida de ella y el saber desde el momento que volvió a Chile después de estar recluida por la dictadura la situación que ella sufrió por miembros de la dictadura militar. Indica que la demandante estuvo detenida, privada de su libertad lo cual la afectó en su personalidad, desconoce exactamente el tiempo que estuvo detenida, pero manifiesta que iban representantes de la CNI a su domicilio y que lo que buscaban dichos representantes era que ella se vinculara con los organismos de estado vigente en ese tiempo, lo que nunca lograron, afectando todo eso su personalidad, sobre todo el tiempo que estuvo detenida en un centro de la CNI. Sabe que fue sometida a otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Conoció la situación que la afectaba porque su hija estaba casada con un pariente de ella, de ese modo se enteró. Sabe que la detención le provocó daños a la demandante y que ésta tenía una aprensión permanente, temor, miedo, angustia, un gran daño psicológico



Foja: 1

el que se le provocó, habiéndose mantenido estos daños en el tiempo hasta ahora, no del modo en que se provocaron durante la dictadura, pero permanecen, lo que amerita su reparación. Le consta que producto de las detenciones y torturas se le provocaron los daños psicológicos descritos. Ella se ha casado, ha tratado de vivir con normalidad, pero siempre se presenta aquello que le ocurrió. Luego depone en autos doña **Fanny Sonnia Pollarolo Villa**, quien señala conocer a la demandante doña Jimena Erazo, de quien fue su terapeuta, en el año 1982 más o menos todo ese año y el siguiente. Cuenta que trabajaba como terapeuta de víctimas de la dictadura, en la Fundación de Iglesias Cristianas (FASIC), lugar donde llegó la demandante. Sabe que figura que en las listas de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura conocida como Comisión Valech y que lo sabe porque se ha informado de quienes figuran en las listas. Relata que la demandante estuvo detenida en un cuartel de la CNI, pero desconoce exactamente cuántos días, pero al parecer no fue mucho tiempo. Sabe que Jimena Erazo fue sometida a tortura y a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que fue precisamente el motivo por el que ella recurrió al FASIC. Cuenta que la patología que ella presentaba fue provocada por la tortura a que había sido sometida, que dichos hechos acontecieron en local de la CNI y que dichas torturas fueron aplicadas por agentes de la CNI, organismo creado en tiempo de la Dictadura Militar de Chile. Puntualiza que la tortura le provocó a la demandante gravísimos daños, pues presentaba un cuadro agudo, muy severo de estrés postraumático, con intensa sintomatología ansiosa, que expresaba sentimientos de profundo terror, a lo que se agregaba un fondo depresivo que fue quedando cada vez más en evidencia, haciendo que en distintos momentos de la terapia temiera al suicidio. Le parece muy importante, para entender la gravedad del cuadro, reconocer que en ella se utilizó un tipo de tortura altamente sofisticado que estaba destinado a dañar en profundidad su estructura psíquica, a deshojarla de todo elemento de voluntad propia, a hacerle sentir que ya no existía en ella, lo que llamamos el sí mismo. Estando por lo tanto a merced total del otro, este tipo de tortura se usa en lo que ha llamado utilizar diferenciando a dos tipos de torturadores, el bueno y el malo. Acota que conocía esa técnica, pero que nunca había visto, ni vio posteriormente un uso tan profundamente aplicado, provocando un efecto tan extremo como si hubiera sido despojarla de su propio cerebro. Comenta que el



Foja: 1

torturador siguió buscando una conexión con ella, y que en este caso, buscaban la posibilidad de utilizarla como una persona al servicio de la represión. Fue por lo tanto, una atención muy urgente e intensiva, y recuerda que la veía dos o tres veces por semana utilizando la necesaria medicación química para su síntoma durante muchos meses, más de un año. Expresa que un daño, un impacto psíquico de tanta profundidad, tan destructivo para su psiquismo, es inevitable que se mantenga a lo largo de la vida de la persona, es una herida en la estructura personal y vital que no puede ser cerrada totalmente ni reparada. Señala que por dichos daños la demandante llegó a consultar, que tenía daños evidentes, visibles, apreciables a primera vista y su relato era y fue siempre absolutamente coherente y consistente con su detención y tortura sufrida por parte de la CNI. Por último, depone en autos don **Manuel Alejandro Jacques Parraguez**, quien señala que efectivamente conoce a la demandante Sra. Jimena Erazo, que la conoció el año 1979 en la ciudad de Quito, Ecuador, en razón de que viajó a dicha ciudad como Consultor en el Convenio que tenía la Institución ILDIS (Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales), con la Presidencia del Ecuador bajo el gobierno de Jaime Roldós. ILDIS administraba los programas de becarios del Servicio Universitario Mundial y de chilenos que estaban en el exilio o, que vivían afuera y Jimena Erazo era representante de los becarios y permanentemente visitaba ILDIS y en ese contexto, como trabajaba ahí, la conoció. Sabe y le consta que Jimena Erazo está en las listas de la Comisión Nacional sobre la Prisión Política y Tortura conocida como Comisión Valech, le consta porque en su función de decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Bolivariana tienen la lista completa para confirmar que algunos estudiantes que estudian bajo la beca Valech se encuentran efectivamente en dicho listado, y que en dichas circunstancias ha visto a varias personas conocidas y, dentro de las cuales ha visto se encuentra Jimena Erazo. Señala que la demandante estuvo detenida en dos oportunidades y en ambos casos por agentes del Estado de Chile. En la primera oportunidad hacia finales del año 1973 y posteriormente en el año 1980. Entiende que su detención en ambas oportunidades fue por pocos días. En la primera oportunidad, según lo que le relató la demandante cuando se conocieron en Ecuador, y posteriormente lo conversó con otras personas que la conocían, que fue detenida en su hogar paterno y posteriormente dejada en libertad. La segunda



Foja: 1

oportunidad en el año 1980, cuenta que también fue detenida por agentes del estado chileno y trasladada al Cuartel Borgoño, que se conocía entonces, y que lo sabe por ella recurrió a él en su calidad de abogado, para solicitar orientación y contar el drama que estaba viviendo. Sabe que en ambas detenciones ella fue sometida a los clásicos apremios y torturas de la época y que le consta porque siempre trabajó vinculado a los abogados de la Vicaría de la Solidaridad y con ellos comentaba y registraba el tipo de apremios y torturas a que eran sometidas las personas de entonces, bajo la dictadura. Las torturas que se le aplicaron a la Sra. Jimena Erazo las aplicaban las mismas personas que las detenían, los mismos agentes del Estado Chileno. Indica que sí se provocaron daños en la demandante. En primer lugar, la primera detención generó un daño directo de horror y miedo, especialmente con el posterior seguimiento que se le hizo una vez que se le dejó en libertad y la presión que recibió de manera reiterada de “ser colaboradora de los servicios de inteligencia y, de esa manera dejarla tranquila y no seguir presionándola. La segunda detención adquiere un carácter traumático, en la medida que ella volvió a Chile con la esperanza y la ilusión de poder llevar una vida tranquila, profesional y en paz. Entonces, dicha detención la remueve, inseguriza y le genera un trauma profundo de verse en lo sucesivo, constantemente sometida en cualquier momento a un seguimiento o a una nueva detención. Apunta que los daños provocados a la demandante son principalmente de carácter psicológico y morales, en la medida que alteran, insegurizan su estado de subjetividad personal y familiar. Señala que cuando conoció a Jimena en Ecuador, ella le solicitó traer a Chile unas cartas a su familia, a su padre y a su madre, y le sorprendió que ellos le solicitaran expresamente que cuando volviera a Ecuador, persuadiera a la demandante de permanecer en el extranjero. Cuando ella es detenida en 1980, le pide colaboración profesional, pudo observar su gran angustia que, se le confirmó muchísimo cuando ella volvió a Ecuador a recibirse de arquitecta y le solicitó que en su calidad de abogado la acompañara al aeropuerto tanto para ir a dejarla como para ir a buscarla ya que tenía pánico y mucho miedo de que fuese detenida y que no la dejaran viajar al irse o no la dejaran entrar al país de regreso. Agrega que, con posterioridad, en ocasión de que la volvió a ver cuando ella desesperada quiso de todas formas irse de Chile por su inseguridad y



Foja: 1

se radicó en Ginebra, Suiza, y que con motivo de que viajaba a la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra, tuvo la oportunidad de conversar algunas veces con ella y le llamaba la atención cómo la demandante tenía muy actual su miedo de entrar a Chile y ya entonces y hasta la fecha, las veces que se han encontrado ha observado que su preocupación familiar en razón de sus hijos, es que ellos se queden fuera del país, estudien y trabajen fuera del país, para que no pasen ni vivan los dolores y el trauma que a ella le tocó vivir. Lo sabe porque tiene una hija de la edad de uno de sus hijos, y siempre su posición fue que su hija no viajara fuera del país, sino que se quedara siempre en Chile. Esto le permitía siempre constatar que aún sigue sintiendo y viviendo el trauma que le crearon dichas detenciones. Finaliza, señalando respecto de la demandante, que sus inseguridades, sus temores, sus traumas, aun cuando fue ayudada profesionalmente de manera psicológica, sin embargo permanece en el dolor íntimo del alma y en su manera como ella enfrenta su vida, especialmente en relación con su familia, particularmente en la protección y seguridad de sus hijos y en la amenaza de que no vuelva a ocurrirle esto nunca más a ella y mucho menos a sus hijos.

SÉPTIMO.- Que, asimismo, la parte demandada solicitó y obtuvo se oficiara al siguiente organismo, cuya respuesta figura agregada en autos y corresponde al siguiente:

1.- Respuesta a oficio 602-2017, mediante Ord. N° 49811-2017, de fecha 11 de octubre de 2017, emitido por el Departamento de Transparencia y Documentación del Instituto de Previsión Social, mediante el cual se remite anexo con referencia de beneficios de reparación Leyes N° 19.992 y N° 20.874 Valech, recibidos por doña Jimena Lucía Erazo Latorre, Run N° 6.194.248-3, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura. En dicho agregado se detallan las siguientes menciones: Causante Jimena Lucía Erazo Latorre, Rut 6.194.248-3. Periodo 02/2005 a 09/2017. Pensión Ley N° 19.992 \$ 21.836.247. Aporte Único Ley N° 1.000.000. Aguinaldos \$ 371.444. Total a la fecha \$ 23.207.691. Pensión Actual \$ 175.988. Tipo de pensión actual Valech.

OCTAVO.- Que, del mérito de autos, documentos individualizados en el motivo quinto del presente fallo y declaraciones de testigos aportadas por la parte demandante, que son contestes con



Foja: 1

las declaraciones de la recurrente, se encuentra acreditado que efectivamente doña Jimena Lucía Erazo Latorre, fue detenida en una primera ocasión el 19 de septiembre de 1973, **por agentes de la Fuerza Aérea de Chile**, en su domicilio, sin orden judicial alguna, siendo conducida al subterráneo del Ministerio de Defensa ubicado en calle Zenteno, Santiago, donde permaneció ilegítimamente privada de libertad hasta el día 20 de septiembre de ese mismo año, fecha en que fue puesta en libertad, siendo en ese lapso de tiempo, obligada a permanecer de pie por largos periodos de tiempo, mirando hacia la pared, con manos en la nuca, sin descanso ni posibilidad de dormir, y permanentemente rodeada de efectivos de la mencionada rama de las fuerzas armadas quienes le apuntaban con sus armas. Luego, en una segunda oportunidad, fue detenida, el 15 de julio de 1980, por **agentes de la Central Nacional de Informaciones**, en su domicilio, sin orden judicial alguna, siendo conducida a un lugar desconocido que luego supo se trató del recinto de detención ilegal Cuartel Borgoño, donde permaneció ilegítimamente privada de libertad por dos días, lapso en el cual fue sometida a actos de tortura, siendo brutalmente golpeada, insultada, sometida a simulacro de fusilamiento, obligada a permanecer desnuda y de pie durante prolongados periodos, escuchando gritos de otras víctimas de tortura y siendo constantemente amenazada de encontrarse en condiciones para ser sometida al método de tortura denominado de modo peyorativo “la parrilla”. Una vez en libertad sufrió por varios meses un intenso amedrentamiento de partes de sus captores quienes concurrían permanentemente a su domicilio para vigilarla y pedir información. Producto de ello, la demandante padece de profundas lesiones emocionales que son consecuencia de los actos de apremios ilegítimos, torturas, tratos crueles e inhumanos y otros vejámenes, efectuados por agentes del Estado. En ese sentido, se han acompañado ficha de ingreso de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura de la demandante, Informes Confidenciales de la Vicaría de la Solidaridad de julio y agosto de 1980, copia de denuncia ante la Fiscalía Militar por detención en lugar no destinado al efecto Rol 51-80, certificado emitido por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas que acredita que la demandante fue atendida en el Programa de Salud Mental de la institución en los años 1980 y 1981 y certificado de la médico psiquiatra Doña Fanny Pollarolo, en el cual se acreditan las secuelas psicológicas y emocionales que se manifestaron en



Foja: 1

la demandante como consecuencia de los actos de tortura a los cuales fue sometida, documentos que no fueron objetados.

NOVENO.- Que, así las cosas, es posible establecer que estos mismos hechos descritos en el párrafo precedente, son los que sustentan la acción de indemnización de perjuicios que deduce la demandante en contra del Fisco de Chile, a raíz de los daños y perjuicios sufridos, por sus repentinas, forzadas e injustificadas detenciones, privaciones de libertad, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes que fueron llevados a cabo por agentes del Estado, hechos que caben dentro de la calificación de crimen de lesa humanidad y que constituyen, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre Derechos Humanos.

DÉCIMO.- Que, de lo reseñado en los motivos precedentes ha quedado establecida la responsabilidad del Estado en el caso en análisis, resultando necesario consignar que en estos autos la actora ha accionado de indemnización de perjuicios pretendiendo obtener el resarcimiento de los daños morales sufridos y ocasionados por y a consecuencia del actuar de agentes del Estado en las detenciones ilegales y actos de tortura y otros a los que fue sometida.

DÉCIMO PRIMERO.- Que, solicitando el rechazo de la demanda deducida, el Fisco de Chile ha interpuesto la excepción de improcedencia de la indemnización, fundada en que la actora ya ha sido indemnizada de conformidad a la Ley 19.123, en los términos analizados en el motivo segundo del presente fallo.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que, atendida la naturaleza de la reparación integral establecida en la Ley 19.123 y sus modificaciones, otorgada en forma voluntaria por el Estado de Chile en el marco del cumplimiento de tratados internacionales ratificados por Chile, y que en ella misma se establece que los beneficios por ella otorgados no son incompatibles con otras reparaciones, siempre reconociendo el principio de reparación integral que sostiene el ordenamiento regulatorio internacional de los Derechos Humanos, no resulta suficiente en modo alguno para fundamentar una excepción en los términos como lo ha expresado la demandada. Así, es necesario precisar que la normativa invocada por el Estado, que solo establece pensiones y bonos asistenciales, no contempla incompatibilidad alguna con la indemnización



Foja: 1

que en esta causa se persigue (artículo 24), sin que ella haya sido otorgada para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los Derechos Humanos, tratándose de distintas formas de reparación, no importando en caso alguno la renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare la procedencia de una indemnización total por daño moral, por los medios que autoriza el ordenamiento jurídico. Así, acorde con lo razonado anteriormente, resulta procedente rechazar la excepción opuesta por el Fisco de Chile.

DÉCIMO TERCERO.- Que, por lo demás, a juicio de esta sentenciadora, si bien específicamente en el caso de autos, en cuanto a la demandante Jimena Lucía Erazo Latorre, en su calidad de víctima directa de las violaciones a los Derechos Humanos, es beneficiaria de una pensión mensual de reparación conforme a la Ley N° 19.123, -principal beneficio concedido a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, cuyo establecimiento tuvo el propósito de “desagravio, satisfacción completa de la ofensa, daño o injuria”, si resulta procedente que sea resarcida del evidente daño moral que en diversas dimensiones ha padecido, que no requiere mayor justificación, sin perjuicio de ello, se relatan vivencias personales de la demandante.

DÉCIMO CUARTO.- Que, en ese contexto la demandada hace referencia a la identidad de causa entre lo pedido en autos y las reparaciones realizadas, aduciendo que el Estado ha realizado una serie de esfuerzos para reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y que éstas no sólo han cumplido con los estándares internacionales de justicia transicional sino que además han provisto indemnizaciones razonables con la realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencias de tales violaciones, por lo que no pueden exigirse nuevas reparaciones.



Foja: 1

DÉCIMO QUINTO.- Que, en esta sentenciadora no puede menos que aceptar y reconocer el hecho que la demandante esté en la actualidad o haya estado favorecida con los beneficios estatales que a modo de compensación y/o reparación se han otorgado en el marco de la denominada justicia transicional, sin embargo, no es posible dar lugar a la excepción, por cuanto la ley que las dispuso no las instituyó bajo un carácter excluyente, de suerte tal que no es posible concluir que por su otorgamiento son improcedentes las indemnizaciones que ahora solicita la actora Jimena Lucía Erazo Latorre.

DÉCIMO SEXTO.- Que, en mérito de lo anterior, esta sentenciadora sostiene que lo que resulta relevante es el daño moral sufrido por aquellos que reclaman indemnización, que en caso de acreditarse no puede menos que acogerse su pretensión y favorecer a la actora con una indemnización. Ahora bien, sin perjuicio que las reparaciones simbólicas y demás beneficios, tienen y han tenido un significado notable, no puede esperarse que esa sola circunstancia impida que la actora pueda de igual forma solicitar reparación pecuniaria, dado que el énfasis está en su otorgamiento y regulación, no en la acción, por lo que acorde con lo razonado, resulta procedente rechazar la excepción opuesta por el Fisco de Chile.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que, en segundo término, el Fisco de Chile ha deducido la excepción de prescripción extintiva de la acción intentada, ello conforme lo establecido en el artículo 2332 del Código Civil, en relación a lo dispuesto en el artículo 2497, en los términos latamente expuestos en el motivo segundo de esta sentencia, sosteniendo que desde el día en que se produjeron las detenciones y torturas de las que fue objeto la demandante, y aun entendiendo suspendido el plazo de prescripción hasta la restitución de la democracia, 11 de marzo de 1990, o hasta la entrega del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, 04 de marzo de 1991, a la fecha de notificación de la demanda, **21 de julio de 2017**, ha transcurrido en exceso el plazo



Foja: 1

que establece el artículo 2332 del Código civil. En subsidio, opone la prescripción extintiva de cinco años contemplado para las acciones y derechos por el artículo 2515, en relación 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la fecha de notificación de la demanda ya referida, transcurrió con creces el plazo establecido en el artículo 2515.

DÉCIMO OCTAVO.- Que, a efectos del debido análisis de la excepción en comento, es necesario tener presente que el fundamento jurídico de la acción deducida en autos lo sitúa la actora en la responsabilidad del Estado por el daño moral en el Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, en razón del hecho propio del Estado al haber actuado como órgano, cometiendo un ilícito a través de sus agentes, siendo estos mismos hechos que sustentan la acción de indemnización de perjuicios que deduce la demandante en contra del Fisco de Chile, posibles de ser calificados como crimen de lesa humanidad y que constituyen, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre derechos humanos, y que, a través de los elementos probatorios ya ponderados, permiten desprender con claridad que el Estado reconoció la calidad de víctima de violación a los Derechos Humanos o de violencia política a doña Jimena Lucía Erazo Latorre. En consecuencia, se demuestra que se está en presencia de una afectada por un delito de lesa humanidad, de manera que el derecho de las víctimas de este tipo de ilícitos encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y normativa de los tratados internacionales ratificados por nuestro país, los cuales obligan al Estado de Chile a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en nuestra carta fundamental, en la especie inciso 2° de los artículos 5 y 6 de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO NOVENO.- Que, sentado así lo anterior, corresponde continuar analizando la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile, haciendo presente que tratándose de delitos de lesa humanidad, su acción persecutoria es imprescriptible, más aun tratándose en la especie de una demanda de indemnización por daño moral sustentada fehacientemente en la comisión por parte de agentes del Estado de detenciones ilegítimas y actos de tortura, que tanto para la doctrina, como para la jurisprudencia, se trata de delitos de lesa



Foja: 1

humanidad y, por ende, una violación grave a las normas internacionales sobre Derechos Humanos, por lo que resulta improcedente declarar la prescripción de la acción indemnizatoria ejercida, como se dirá.

VIGÉSIMO.- Que, en efecto, en la clase de delito por el cual se sustenta la acción indemnizatoria reclamada, no es coherente entender que la acción civil que de ellos deriva esté sujeta a las normas sobre prescripción en la ley civil interna, ya que ello contraria la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional de Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió a las personas calificadas como víctimas de prisión política y torturas durante el período 1973-1990, reconocidas por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que, a mayor abundamiento, es necesario tener asimismo presente que, pesando sobre el Estado el deber de reparar a la víctima, este deber encuentra también su consagración en el derecho interno en el sistema de responsabilidad del Estado, que deriva además, del artículo 3 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto dispone que la administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetarse es el de la responsabilidad, lo que recoge expresamente en su artículo 4.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que, sin perjuicio de lo ya expresado, corresponde señalar que los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, de modo que estas no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, toda vez que, si se verifica un hecho ilegítimo imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma



Foja: 1

de esa índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación. En el mismo sentido la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, vigente en nuestro país desde el 27 de enero de 1980, establece en su artículo 27 que el Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones. En este sentido autores como Humberto Nogueira Alcalá, “Las Constituciones Latinoamericanas” en Anuario de derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2000 ha señalado que de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del mismo.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que, en consecuencia, solo corresponde como se señaló, desestimar la excepción de prescripción opuesta por el demandado de autos, tanto la excepción formulada por vía principal como aquella formulada por vía subsidiaria.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que, en tercer término, el Fisco de Chile ha deducido en subsidio de las defensas y excepciones precedentes la alegación en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido, y en subsidio de ello solicita que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales, alegaciones a las que se deberá estar a lo que se dirá más adelante.

VIGÉSIMO QUINTO.- Que, por último, en cuanto a la improcedencia del cobro de reajustes e intereses, el Fisco de Chile plantea que éstos solamente pueden devengarse en la medida que la sentencia los acoja y la obligación se establezca, los que sólo podrán devengarse, para el evento que se acoja la pretensión de la actora civil, desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y el representado de la defensa incurra en mora. Esta sentenciadora al respecto, estima que al haberse establecido la calidad de la actora de víctima de la atentados y violaciones a los derechos humanos



Foja: 1

provenientes de parte de agentes del Estado, queda en evidencia la calidad de garantes de la seguridad pública y de dependientes del Estado de Chile y es ahí donde se evidencia el daño moral y su extensión, que esta sentenciadora estima debe ser resarcido y regulado prudencialmente, y reajutable desde la fecha de la dictación de esta sentencia.

VIGÉSIMO SEXTO.- Que, se encuentra establecida la comisión de violación a los Derechos Humanos por agentes del Estado, de la cual surge la responsabilidad del Estado conforme a lo establecido en el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental en cuanto prescribe que los órganos del Estado deben someter su acción a la constitución y a las leyes, y son responsables de sus actos de acuerdo a la ley, como asimismo a lo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado al disponer que “El Estado será responsable de los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que las hubiere realizado” . Cabe señalar que el citado principio se ve reiterado en el artículo 44 del mismo texto legal. Al efecto, de las normas citadas en el párrafo precedente, solo es dable concluir que tanto el constituyente como el legislador han expresado en forma inequívoca su intención de que el Estado se haga responsable del actuar de sus agentes, cuando este ocasiona un daño al administrado, responsabilidad que por su naturaleza cae en el ámbito de la responsabilidad extracontractual.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Que, necesario resulta a continuación, el análisis del daño cuyo resarcimiento se pretende por la actora, en cuanto presupuesto necesario para que surja la obligación de indemnizar



Foja: 1

los perjuicios que se intenta en esta causa. Al efecto es necesario precisar que se trata en la especie del resarcimiento del daño moral, que requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, recordando que el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física, y/o en los sentimientos o afectos de una persona. El daño moral es, en consecuencia, toda lesión causada culpable o dolosamente que signifique molestias, perturbación en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial o inherente a la persona e imputable a otra, daño que no es de naturaleza propiamente económica y que no implica, un deterioro o menoscabo real y directo en el patrimonio de la misma, susceptible de prueba y determinación directa, sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Que, atendidas las particularidades reseñadas en el motivo precedente, es dable desprender que la comprobación de la inobservancia o agravio del derecho subjetivo envuelve al mismo tiempo, la prueba de la efectividad del daño moral, de suerte que comprobada la existencia de un delito de lesa humanidad, como es el caso de autos, forzoso es concluir que se ha producido un daño y que debe ser reparado, toda vez que no podría ser de otra manera, por haber sido víctima de detención ilegal, privación de libertad ilegítima, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y otros vejámenes, como asimismo, incertidumbre acerca de su permanencia con vida, y ello, en más de una ocasión, en tanto, materialmente resulta extremadamente difícil medir con exactitud la intensidad con que las lesiones han afectado a la víctima, por la naturaleza del perjuicio provocado. Por ello, la naturaleza del dolor no hace indispensable la prueba del mismo, sino que se trata de un hecho evidente que las lesiones físicas y mentales sentidas, experimentadas por el sujeto causan un sufrimiento, que no requiere de evidencia, pero que en todo caso debe ser indemnizado por quien los ocasionó, tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos y debiendo hacerse una apreciación equitativa y razonable por el tribunal.

VIGÉSIMO NOVENO.- Que, en el caso de autos, en relación al daño sufrido por la actora producto de las detenciones ilegítimas y



Foja: 1

actos de tortura a los cuales fue sometida, es dable presumir que le produjo un dolor grave, angustia, aflicción y natural temor al momento de producirse los hechos y que innegablemente se han prolongado a lo largo de su vida, dejando una marca indeleble en su desarrollo posterior, una herida en la estructura personal y vital que no puede ser cerrada totalmente, conclusión que se ve inequívocamente corroborada y que se infiere necesariamente de los testimonios analizados en el motivo sexto, que dan cuenta de los padecimientos sufridos, proyectos de vida truncados y secuelas psicológicas, constatadas por profesionales de salud.

TRIGÉSIMO.- Que, encontrándose acreditado que la actora sufrió una lesión o detrimento en su persona, en el desarrollo de la misma, lo que es dable presumir desde las máximas de la experiencia, y la naturaleza de los hechos acreditados en autos, que afectaron su integridad psíquica, su libertad, sus afectos, estabilidad y unidad familiar, esto es, en general, los atributos o cualidades morales de una persona, con las consiguientes repercusiones en la normalidad de su existencia, necesario resulta acceder a la demanda de indemnización del daño moral experimentado por la actora, el que atendido los antecedentes que obran en el proceso y que han sido reseñados en los motivos anteriores, se accederá a la demanda de autos, teniendo presente los criterios de coherencia en la interpretación de los antecedentes, fijando a título de indemnización de perjuicios por el daño alegado prudencialmente la suma única y total de \$80.000.000.- para la demandante de autos.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Que, debiendo pagar la demanda la suma de dinero ordenada pagar en el motivo precedente, ello deberá efectuarse debidamente reajustada de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha de la presente sentencia y aquella en que efectivamente se realice el pago, más intereses corrientes para operaciones reajustables, según liquidación que se practicará en su oportunidad.

Y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 1437, 1968 y siguientes del Código Civil, 144, 159, 254 y siguientes, 342, 346 N° 3, 384, 430, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; Ley 19.123; artículo 5 y 6 de la Constitución Política de la República, se declara:



Foja: 1

Que se acoge, con costas, la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual interpuesta a fojas 1 y siguientes, en cuanto la demandada deberá pagar a la demandante, **doña Jimena Lucía Erazo Latorre**, la suma de \$80.000.000.- por concepto de daño moral, con reajustes e intereses en la forma indicada en el motivo trigésimo primero.

Regístrese.

Dictada por **doña Ximena Díaz Guzmán**, Jueza Suplente. Autoriza don **Christián Viera Naranjo**, Secretario Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, dos de Diciembre de dos mil diecinueve**

